

# Gobierno ilegítimo y corporativo

José García FB

Los bajos salarios en Nicaragua se traducen en pobreza. Esta pobreza se visualiza cuando conocemos que existe un déficit habitacional de 900 mil viviendas, según el gobierno y la Cámara empresarial de la construcción. Lo que nos explica que ocupen una misma vivienda tres familias. El salario mínimo es de C\$ 3,450 córdobas mensuales (equivalente a US\$ 115 dólares mensuales) y el costo de una canasta básica es de unos C\$ 13,000 córdobas mensuales (equivalente a US\$ 433 dólares mensuales), lo implica que solamente puede comprar el 27 por ciento de la canasta básica. Por lo tanto, el asalariado, los que tienen salarios y trabajan, su familia no come bien (hay desnutrición) y viven hacinados. En las áreas rurales, donde el pequeño campesino no tiene crédito para la siembra (por la falta de una política gubernamental a favor del pequeño y mediano productor), tiene que vender su tierra y emigra a las ciudades a incrementar el número de pobres urbanos.

En julio de este año (2016), la tasa de personas que laboran en la economía informal, caracterizada por carecer de cualquier mecanismo de protección social y con salarios inestables y precarios, alcanzaba el 79 por ciento de la población económicamente activa (PEA). La cúpula política de Nicaragua en el poder desde 1990 todo lo articula en términos del mercado y procede bajo el ajuste estructural del FMI -Banco Mundial- BID a la privatización/

extranjerización del sector energético (petróleo, electricidad).

La energía de biomasa que producen los ingenios, por contratación directa (sin licitaciones), pasó de US\$ 6.5 centavos dólares el kWh, en 2011, a US\$ 11.7 centavos dólares el kWh en 2016, un incremento injustificado del 80 por ciento. Y la energía eólica fue contratada directamente (sin licitación) a un precio excesivo de US\$ 11.42 centavos dólares el kWh. Son energías injustificadamente caras. Ambas fuentes de energía renovable desplazan actualmente hasta 250 MW de plantas térmicas, cuya energía es más barata (a lo sumo, a US\$ 6.5 centavos de dólar el kWh).

Este desplazamiento, dado el carácter no despachable de esta energía eólica y de biomasa, significa un sobrecosto mensual de US\$2.67 millones de dólares para la tarifa. Esto demuestra que el gobierno favorece la ganancia extraordinaria del capital.

El modelo corporativo del gobierno junto al gran capital es un modelo concentrador de la riqueza. La economía nicaragüense está creciendo pero crece mucho más la concentración de la riqueza. La desigualdad es una de las principales características más fuerte del modelo y es la amenaza más grande de la democracia porque el gobierno favorece al poder fáctico de “los de arriba” que impulsa la concentración del capital.

Hoy existen 200 señores nicaragüenses poseen tres veces más lo que el país todo entero produce en un año; entonces este

problema de la desigualdad y que la tasa de crecimiento de la ganancia del capital sea más importante de la economía total son las amenazas más feroces que tiene la democracia.

El gobierno se empeña en llevar a cabo con los parlamentarios de la bancada “zancuda” la liquidación de toda oposición verdadera. Es un insulto que los poderes fácticos (gran capital e iglesia católica) no señalen el peligro que significó ese golpe de estado institucional.

Independientemente de la votación final de las elecciones de noviembre, seguramente la lucha social se intensificará en el 2017, se aumentan movilizaciones por distintas reivindicaciones.

En este momento crítico para la lucha político social en Nicaragua, en el que el gobierno, el gran capital nos han impuesto un golpe parlamentario y ha expulsado a los diputados electos en 2011, solamente podemos influenciar, en el futuro, sobre las relaciones de fuerzas reales con movilizaciones sociales.

El problema es que en la desaceleración económica y su repercusión social tiende a agudizarse, por ser una economía periférica, dependemos del comportamiento del capitalismo internacional que tienden a una recesión. Por eso los grandes capitales locales tienen necesidad de seguir implementando su política de alianza con este gobierno ilegítimo para asegurar sus ganancias y por lo tanto a mantener, hasta donde sus intereses no sean lesionados, su alianza con el go-

bierno ilegítimo de Ortega.

El peligro del diálogo nacional, después de las elecciones, es que sea aprovechado por los arribistas, el gran capital, los aduladores y los trepadores que intentarán obtener prebendas a cambio de legitimar y maquillar al gobierno autoritario. Por eso es indispensable que se haga antes y no después. El objetivo del diálogo nacional debe ser la restitución de unas elecciones libres y transparentes y con cambios en la ley electoral y sustitución de las actuales autoridades electorales del CSE. Hay que estar claro que el gobierno autoritario no desaparece en un diálogo, pero la postergación de las elecciones permite que el movimiento social se nutra de nuevas fuerzas y tenga las posibilidades de cambiar la correlación de fuerzas políticas. Los zancudos no tendrán cabida, ya para el gobierno pierde su importancia. Hermanos estamos ante un hecho histórico que marcara en definitiva las futuras generaciones que están conformadas por nuestros hijos y nietos.